

La rebelión del pueblo puertorriqueño

Por Néstor Rosa-Marbrell
Corresponsal/San Juan

Cuando en septiembre de 2017 el huracán María devastó a Puerto Rico y dejó sin electricidad ni agua potable e incomunicada a la población, todo el mundo supuso que la recuperación sería rápida. Había varias razones para ello, como la creencia de que Estados Unidos socorrería de inmediato a la isla del Caribe que ha mantenido por 121 años bajo su dominación colonial, pero no fue así.

Mientras llovía la indiferencia hacia los 3,5 millones de habitantes de Puerto Rico y el presidente estadounidense Donald Trump se burlaba de la tragedia de los puertorriqueños, la rabia se contenía, excepto la alcaldesa capitalina Carmen Yulín Cruz Soto, quien lo enfrentó.

Durante semanas de precariedad el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, vivía a todo lujo, junto a su grupo más íntimo de asesores y ayudantes, en el Centro de Operaciones de Emergencia, donde concertaban millonarios contratos con miras a la reparación del sistema eléctrico, entre otros.

Al dolor acumulado por la pérdida de 4.645 vidas debido al huracán se agregó la frustración por las viviendas sin techo, de las cuales todavía quedan 30 mil con toldos azules, y los muertos acumulados en el Instituto Forense en espera de autopsia.

A partir de ahí las comunidades comenzaron a organizarse y a salir poco a poco del precipicio con la limitada asistencia de los municipios y de organizaciones sociales.

El gobernador Rosselló Nevares alardeaba de los avances que su Administración alcanzaba, en tanto crecían las denuncias de corrupción y la repartición de contratos a sus allegados, esquema que se estableció desde antes de jurar al cargo en enero de 2017.

Más de 400 escuelas públicas fueron cerradas sin que se escucharan



Cientos de miles de manifestantes salieron a las calles para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Foto: Victor R. Birriel

los reclamos de los docentes ni de las comunidades, al tiempo que la secretaria de Educación, Julia Keleher, reinaba como la principal figura del Gobierno de Rosselló Nevares, quien hacía gala de un discurso elaborado por la publicitaria KOI, poseedora de contratos ascendentes a 50 millones de dólares para enaltecer la imagen del político.

El 10 de julio pasado el Buró Federal de Investigaciones anunció el arresto de Keleher, la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud Ángela Ávila y el presidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, beneficiario de multimillonarios contratos con agencias públicas, así como de otras personas cercanas al Gobierno.

Tres días después el Centro de Periodismo Investigativo divulgó 889 páginas de un chat de la plataforma encriptada Telegram, en el que el gobernador Rosselló Nevares se burlaba, junto a una docena de integrantes de su círculo más íntimo de asesores y afines, de las mujeres, la comunidad LGBT, los pobres y hasta de los muertos del huracán María.

De inmediato comenzaron las manifestaciones espontáneas frente a La Fortaleza, sede del Ejecutivo en el Viejo San Juan, donde durante una decena de días se congregaron cientos de jóvenes, a quienes se unieron personas de todas las edades y condiciones

sociales para pedir la renuncia del mandatario.

Las protestas alcanzaron tal nivel que en una semana se efectuaron dos marchas que superaron los 600 mil manifestantes cada una, lo que paralizó el país y generó preocupación en sectores económicos por el cierre de centros comerciales y la banca.

El reclamo fue siempre el mismo: "Ricky, renuncia" y "Ricky, vete ya", además contra la corrupción pública que estrangula al pueblo y los privilegios concedidos a los allegados al anexionista Partido Nuevo Progresista.

Al filo de la medianoche del 24 de julio Rosselló Nevares emitió un discurso grabado por Facebook Live, en el cual informaba su renuncia a la gobernación, efectiva el viernes 2 de agosto de 2019, a las 17:00.

El mensaje concluyó en la primera hora del 25 de julio, día en que se cumplían 121 años de la invasión militar de Estados Unidos, 67 años de la Constitución del Estado Libre Asociado y 41 años del asesinato de dos jóvenes independentistas por la policía en el Cerro Maravilla, en Villalba (centro).

Cuando nadie lo pensaba, de manera espontánea se rebeló el pueblo puertorriqueño que depuso al gobernador Rosselló Nevares. Lo que parece evidente es que esto no parará ahí porque, como expresaban algunos carteles, "nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo".



BRASIL

Bolsonaro y su apología de la dictadura

PÁGINA 2



CHILE

El agua: ¿un derecho de los chilenos?

PÁGINA 3



ECUADOR-FMI

Peligrosa asociación

PÁGINA 3



CENTROAMÉRICA

Niños migrantes en riesgosa travesía

PÁGINA 4

Palabras de Bolsonaro causan indignación

Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal/Brasil

Con devoción fiel por la dictadura militar (1964-1985), el presidente Jair Bolsonaro desató nuevamente la polémica al cuestionar la legitimidad de la Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes cometidos en ese oscuro periodo en Brasil.

Sin meditar en consecuencias, el político de extrema derecha declaró a periodistas que el desaparecido preso político Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira resultó ejecutado por un grupo armado de izquierda y no por los militares. Esto, pese a que un documento secreto de Aeronáutica y la propia comisión atestiguan que fue asesinado por las Fuerzas Armadas en 1974.

Con verbo mordaz y necedad mental, como aseguran sicólogos, el exmilitar gobernante aseguró que relataría al hijo del ejecutado, Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), cómo murió su padre.

"¿Quién es esa OAB? Si un día el presidente de la OAB quiere saber cómo su padre desapareció en el periodo militar, se lo cuento. No va a querer oír la verdad. Yo se lo cuento", dijo Bolsonaro, quien nunca ha ocultado su adulación al régimen castrense. Cuando Fernando, funcionario público e integrante de la orga-



Bajo el lema "Dictadura Nunca Más", manifestantes en Brasil recuerdan aniversario del golpe de Estado de 1964.

nización Acción Popular, fue arrestado y desaparecido el 22 de febrero de 1974, su hijo Felipe tenía dos años de edad. Bolsonaro contaba con 19 y estaba en la academia del Ejército.

Ante los ofensivos y disparatados desahogos del mandatario, Felipe Santa Cruz respondió que exigiría a la Corte Suprema aclarar tales confesiones.

Para Santa Cruz, Bolsonaro actuó como un "amigo del sótano de la dictadura" y demuestra "rasgos de carácter graves en un gobernante: crueldad y falta de empatía".

La OAB rechazó por su parte la declaración del jefe de Estado y remarcó que todas las autoridades del país deberían "obedecer la Constitución Federal".

En ese mismo tono, Eugenia Gonzaga, presidenta de la Comisión Especial sobre Personas Políticas Muertas y Desaparecidas, calificó el discurso de Bolsonaro de "extremadamente grave".

Bolsonaro intentó en marzo reivindicar la dictadura y exhortó a los militares a conmemorar el golpe militar de 1964, anuncio que causó una ola de repudio en la sociedad brasileña.

Casi todos los sectores denunciaron la irresponsabilidad del mandatario al intentar justificar el probado hecho y negar los actos criminales de la dictadura militar instalada, que cobró más de 430 muertes.

El 31 de marzo de 1964 Brasil vivió uno de los días más oscuros y trágicos de su historia: el inicio del régimen castrense, luego del complot que derrocó al presidente João Goulart, legítimamente elegido por el voto popular.

Tras años sin distinción en Brasil, la fatídica fecha se hizo notable cuando Bolsonaro informó su propósito de evocarla en los cuarteles, sobre lo cual hasta la justicia se pronunció.

En la ocasión, el Ministerio Público apuntó que la actitud del mandatario "suena como apología a la práctica de atrocidades masivas y, por lo tanto, merece repudio social y político, sin perjuicio de las repercusiones jurídicas".

Recalcó que "el golpe de Estado de 1964, sin ninguna posibilidad de duda o de revisionismo histórico, fue un rompimiento violento y antidemocrático del orden constitucional".

Alertan de posible injerencia de EE.UU. en Bolivia

Por Jorge Petinaud Martínez
Corresponsal/Bolivia

El Gobierno de Bolivia tiene indicios de que fundaciones financiadas por Estados Unidos sostuvieron encuentros con candidatos de la oposición para coordinar acciones con vistas a los comicios del 20 de octubre, denunció el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linares.

Anunció el vicemandatario que en los próximos días brindará mayores detalles con fotos, lugares y horas de viaje, y recordó que Washington siempre apoyó, manejó y financió a los partidos de derecha del país, y ahora no es la excepción.

Con anterioridad, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Lino Cárdenas alertó sobre una posible influencia

del vicesecretario de Estado adjunto norteamericano Michael O'Reilly sobre fuerzas opositoras, durante su reciente viaje a Bolivia.

"Una visita producida en ese contexto nos deja esa posibilidad de que pudiera haber venido a ordenar el escenario político opositor en atención a que hay un conjunto de alternativas que no han podido unificarse", opinó el legislador en referencia a las contradicciones entre distintas tendencias opuestas al MAS de cara a los comicios.

Desde su punto de vista, la presencia del vicesecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de la potencia del norte tiene mucha relación con la división imperante en los grupos opositores.

Bolivia y EE.UU. mantienen relaciones solo a nivel de en-



Washington siempre apoyó, manejó y financió a los partidos de derecha del país, y ahora no es la excepción, afirmó el vicepresidente de Bolivia.

cargado de negocios después que en 2008 el Gobierno de Evo Morales expulsó al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg por injerencia en asuntos internos y por conspirar en contubernio con grupos afines a los intereses de Washington.

La alerta de Cárdenas coincidió con el interés expresado públicamente por la diputada opositora Norma Piérola de

reunirse con el enviado de Estados Unidos a Bolivia.

La ventaja que mantiene en las encuestas el presidente Evo Morales sobre su más cercano rival de cara a su reelección aporta más credibilidad a las denuncias de injerencia de EE.UU. para unificar el voto opositor.

Según el primer sondeo nacional realizado por Ciesmori para la cadena multimedia El

Deber y publicado recientemente, Morales (37 por ciento) supera al ocupante del segundo lugar y representante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa (26 puntos porcentuales), su más cercano adversario.

Ubicado en tercera posición con nueve unidades sobre 100 se encuentra Óscar Ortiz, de la Alianza Bolivia Dijo No; en cuarto marcha Víctor Hugo Cárdenas (tres por ciento), de Unidad Cívica Solidaridad, y el resto de los aspirantes no sobrepasa el uno por ciento en la intención de votos.

De acuerdo con la encuesta de Ciesmori, los votos en blanco y nulos suman 12 puntos sobre 100, un seis por ciento de los encuestados no sabe por quién votar, no reveló su decisión un dos por ciento y el uno por ciento no contestó.



PRENSA LATINA
Agencia Informativa Latinoamericana S.A.

SUPLEMENTO INTERNACIONAL. También circula como suplemento en: México (**La Jornada**); El Salvador (**co. Latino**), Bolivia (**Cambio**)
Presidente: Luis Enrique González. **Vicepresidenta Editorial:** Lianet Arias Sosa. **Director Editorial:** Mario Hubert Garrido.
Editora Jefa: Carmen M. Esquivel Sarria.
Dirección de Arte: Anathais Rodríguez. **Diseñadora:** Martha Iglesias Sierra. **Corrección:** María Elena Mazola Fiallo.

Corresponsalías: Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, EE.UU., Etiopía, Francia, Guatemala, Grecia, Haití, India, Italia, Libano, México, Nicaragua, ONU, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, Serbia, Siria, Sudáfrica, Uruguay, Vietnam. Redacción: Vicepresidencia Editorial de **Prensa Latina**. Calle 21 No. 406, entre F y G, El Vedado, La Habana. Cuba. Teléfonos: 7 838 3649, 7 832 9353, 7 838 3496 ext.-184. Email: orbeinternac@pubs.prensa-latina.cu.
Sitios de **Prensa Latina S.A.** en Internet: <http://www.prensa-latina.cu>, <http://www.plenglish.com>, <http://www.prensalatina.com.br>

EL AGUA

¿Un derecho de los chilenos?

Por Rafael Calcines
Corresponsal/Chile

La grave crisis sufrida por los casi 200 mil habitantes de la ciudad de Osorno ante la falta de agua potable puso una vez más en la palestra el problema del uso y la propiedad del vital líquido en Chile.

A estas alturas, cuando en el planeta el empleo de ese recurso indispensable es considerado un derecho humano, en este país austral el debate se centra en cómo lograr que esté al alcance de todos al estar su distribución en manos privadas y por ello el acceso depende de la capacidad de los ciudadanos para pagar por consumirla.

La crisis de Osorno, que durante diez días mantuvo en emergencia sanitaria a los habitantes de la ciudad por una fuerte contaminación de petróleo en una planta purificadora de agua perteneciente a la empresa Essal, evidenció que esa entidad privada cometió múltiples negligencias y engañó al país sobre sus posibilidades de solucionar el problema.

Restablecido el servicio, ahora el Gobierno, defensor a ultranza de la propiedad privada, parece deshojar margaritas para decidir a cuánto ascenderá el monto de las multas que deberá desembolsar Essal para resarcir a los osorninos de los innumerables daños que causó a las familias y a múltiples negocios de la ciudad.

El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, se pronunció alto y claro al señalar que lo ocurrido en la región de Los Lagos obedece al carácter



Ante la emergencia en Osorno, crecen los reclamos por la nacionalización de los recursos hídricos.

depredador del neoliberalismo y su búsqueda frenética de ganancias, y consideró que, al igual que Osorno, otras muchas ciudades sufren de escasez hídrica por ese motivo.

Por ello llamó a las bancadas parlamentarias a impulsar con suma urgencia una ley de nacionalización del agua y eliminar definitivamente la política de concesiones y privatización de los bienes básicos. De acuerdo con Lagos, el Estado debe garantizar el acceso al agua como un derecho elemental, para lo cual debe pasar a ser propiedad de todos los chilenos.

En igual sentido, una mesa de organizaciones de la comuna de Osorno propuso la realización de un plebiscito vinculante y llamó a los partidos políticos,

parlamentarios y organizaciones sociales a unirse con el objetivo "devolver al patrimonio del Estado de Chile la potestad sobre este bien común".

Pero lograr esto no será nada fácil.

Ya muchos advierten que la "mano dura" anunciada por el presidente Sebastián Piñera para hacer pagar a Essal por su negligencia e incapacidad comienza a ablandarse, y las miradas apuntan hacia otro lado cuando se escuchan cada vez más voces reclamando que se cancele a esa compañía la concesión sobre la explotación del agua.

Además, la propia Constitución del país, que data de la época de la dictadura de Augusto Pinochet, establece un

modelo de privatización de los recursos que en el caso del agua permite su explotación indiscriminada para beneficiar sobre todo a las grandes empresas agrícolas y a la industria en general.

El Código de Aguas aprobado en 1981 refrendó esa política, y la reticencia de las grandes empresas y sus representantes en el mundo político a cualquier cambio queda evidenciada en la lentitud con que ha sido asumida una moderada propuesta para introducir algunas modificaciones a esa legislación.

Desde 2011 comenzó la tramitación de un proyecto de ley para modificar el Código, sin embargo, todavía anda dando vueltas en el Congreso de la República.

Los riesgos del acuerdo con el FMI

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Ecuador

Recesión y más desempleo son, según algunos expertos, los principales peligros de las reformas solicitadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador para concretar un acuerdo criticado por muchos dentro y fuera de este país suramericano.

Los perjuicios que implica esa asociación con el FMI quedaron recogidos, entre otros, en un reciente informe realizado por el Centro para la Investigación en Economía y Política (CEPR).

El estudio evalúa las pautas del convenio entre las partes, revisado en marzo pasado por el presidente Lenín Moreno y la entonces directora general de la instancia financiera, Christine Lagarde, con la finalidad de otorgar préstamos a esta nación andina.

Como resultado de esas negociaciones, el Directorio Ejecutivo del Fondo aprobó un acuerdo con Ecuador en el marco del Servicio Ampliado, por la suma de cuatro mil 200 millones de dólares en préstamos, de los cuales hasta ahora se han entregado cerca de 900 millones. El resto del desembolso está



Como consecuencia de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional serán despedidos hasta 140 mil empleados del sector público.

planeado en un término de tres años, siempre que el FMI compruebe el cumplimiento de los requisitos impuestos a la contraparte.

Teniendo en cuenta esas condiciones, el informe del CEPR, elaborado por su codirector Mark Weisbrot y el exdirector del Banco Central del Ecuador, Andrés Arauz, recalca que, como resultado, Ecuador reduciría su Producto Interno Bruto per cápita, miles de puestos

laborales y experimentará mayor inestabilidad macroeconómica.

"El programa del FMI para Ecuador exige eliminar políticas que a lo largo de los últimos años han tenido mucho éxito en estimular el crecimiento económico, reducir el desempleo y disminuir la desigualdad y la pobreza", sentenció el experto.

Explica el informe que se requiere un amplio ajuste con el fin de crear un gran superávit fiscal que sería consecuencia de la combinación de recortes salariales y despidos de hasta 140 mil empleados del sector público, del aumento de los precios de los combustibles y la electricidad, al reducir los subsidios.

También implicaría el incremento de las tarifas de servicios públicos, la subida de los impuestos indirectos y la eliminación de las exenciones del Impuesto al Valor Agregado que actualmente benefician a la mayoría de los hogares.

"Esto causaría grandes dificultades en millones de familias trabajadoras, incluyendo aumentos en el desempleo, en el empleo inadecuado y, lo más probable, un incremento de la pobreza", aseveró el Centro para la Investigación en Economía y Política.

Las observaciones del análisis solo refuerzan la realidad que ya se vive en el interior del país como consecuencia de las medidas de ajuste fiscal contenidas en el pacto con el FMI, las cuales están en franca aplicación en esta nación suramericana.

Desde hace meses el Gobierno dispuso y anunció la disminución de miles de puestos de servidores públicos, la eliminación de ministerios y secretarías, y fusión de otros, recortes presupuestarios en sectores clave como la educación, seguridad social y salud, y el alza en el precio de los combustibles.

Mientras el Ejecutivo implementa su plan de reducciones para cumplir lo exigido por el Fondo, el pueblo ya siente los perjuicios de las medidas y, en respuesta, ha salido a la calle en varias ocasiones en protesta por lo que considera un entreguismo total a la entidad financiera, cuyo historial no muestra beneficios para la ciudadanía.

El resto de 2019 y 2020 será un período importante para comprobar los resultados reales de la determinación del Ejecutivo de permitir el reingreso del FMI en este territorio, que creció en equidad durante los diez años de dirección del expresidente Rafael Correa, cuando fue expulsada del país la institución financiera.

Travesía fatal para niños migrantes

Por Carmen Esquivel
Periodista y editora de **Prensa Latina**

El descubrimiento de los cuerpos sin vida de un padre y su hija en el río Bravo causó una honda conmoción, hasta el papa Francisco expresó su pesar, aunque lamentablemente este no es un hecho aislado, sino la realidad de muchos migrantes que intentan alcanzar el llamado sueño americano.

Óscar Alberto Martínez, de 25 años, y Valeria, de 23 meses, fueron arrastrados por las aguas cuando a fines de junio pretendían cruzar la frontera entre México y Estado Unidos por la localidad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas.

Cuando los cadáveres emergieron varias horas después aún estaban abrazados, según captó el lente de la periodista Julia Le Duc, del diario *La Jornada*, quien expresó su esperanza de que la imagen mueva conciencias.

El papa se mostró consternado por esta tragedia y por la de todos los migrantes que perecieron tratando de escapar de la guerra y la miseria.

El informe *Viajes fatales*, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Internacional para las Migraciones, refiere que desde 2014 y hasta 2018 un niño migrante fue reportado como muerto o desaparecido cada 24 horas en el mundo. El documento añade que en ese período fallecieron unos mil 600 menores, aunque la cifra puede ser mucho mayor porque hay casos sin registrar.

Es conocido que desde México y el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) cientos de familias, incluso menores sin sus padres, salen cada día rumbo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Dos son las causas fundamentales de esta migración: en primer lugar, la pobreza. De acuerdo con el informe *Desarraigos en Centroamérica y México*, de la Unicef, en Honduras la pobreza alcanza al 74 por ciento de los menores, en Guatemala al 68 y en México al 54.

Otro factor que influye en la movilidad humana es la violencia. Centroamérica es una de las regiones del mundo con mayor número de homicidios, con 62,1 asesinatos por cada 100 mil habitantes, concluye un estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Este fenómeno está asociado al narcotráfico y al crimen organizado, ya que la región es zona de trasiego de estupefacientes desde el sur del continente hasta Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo. El flagelo también está vinculado con las maras o pandillas juveniles, que se han convertido en un problema creciente en los países del Triángulo del Norte.

En mis años de trabajo en Guatemala como corresponsal de **Prensa Latina** tuve la ocasión de visitar el asentamiento Mario Alioto, en el municipio de Villa Nueva, uno de los más violentos del país, donde se desarrollaba un proyecto cultural para tratar de alejar a los niños de las maras.

Sacar a un joven de esos grupos es difícil porque desde edades tempranas, entre los ocho y 12 años, muchos de ellos se integran a las bandas y son los encargados de cobrar los "impuestos" (extorsiones) a las tiendas y a los choferes de autobuses.

Gracias a la iniciativa se creó en el lugar un grupo de teatro con el objetivo de que, mediante la expresión artística, los menores pudieran apartarse de las



Desde los países del llamado Triángulo Norte Centroamericano cada día niños solos o con su familia emprenden la travesía hacia el territorio de Estados Unidos.



Esta imagen captada por el lente de la periodista Julia Le Duc, del diario *La Jornada*, causó una profunda conmoción.

drogas y el delito. Un proyecto loable pero no suficiente porque es el Estado quien tiene que asumir la responsabilidad de proteger a la niñez y la juventud e invertir en programas para ese sector.

La falta de políticas públicas, el acceso limitado a los servicios y a una educación de calidad, la desigualdad y la pobreza extrema conducen a muchos niños, a veces con la familia y otras sin acompañamiento, a iniciar la travesía hacia territorio norteamericano.

Están obligados a elegir rutas irregulares y peligrosas y en el camino muchos sufren hambre, explotación

y abusos, algunos hasta mueren, ya que son presa de contrabandistas, delincuentes y otras formas del crimen organizado.

De los que logran cruzar la frontera, la gran mayoría son detenidos, aislados de sus familias y devueltos a sus países de origen.

La situación para los migrantes se agravó con el endurecimiento de las medidas por parte de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su política de tolerancia cero, la cual trata y procesa como criminales a los indocumentados.

En los centros de detención los menores separados de sus padres sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes que van desde atropellos, represalias, hasta condiciones de hacinamiento y hambre, denuncian organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

La ONU pide a los Estados de origen, tránsito y destino trabajar juntos y adoptar políticas que tomen en cuenta las causas fundamentales de las migraciones.

Pero mientras persista la pobreza y la violencia el flujo no se detendrá, aun cuando cada vez más tengan que marchar por caminos peligrosos donde muchas veces los niños llevan la peor parte y en no pocas ocasiones pierden la vida.

